

**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

**INE/JGE25/2025**

**RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO  
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD  
INE/RI/SPEN/1/2024**

Ciudad de México, 15 de febrero de dos mil veinticinco.

**VISTOS** los autos para resolver el recurso de inconformidad **INE/RI/SPEN/1/2024** promovido por [REDACTED] en contra de la Resolución dictada en el Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED], por el cual se le sancionó con su destitución al haberse acreditado diversas faltas al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa.

**G L O S A R I O**

<b>Parte Actora/ promovente/ recurrente</b>	[REDACTED]
<b>Parte Denunciante</b>	[REDACTED]
<b>Autoridad Instructora/ Dirección Jurídica</b>	Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional Electoral.
<b>Autoridad Resolutora/ Secretaría Ejecutiva</b>	Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
<b>CPEUM/Constitución federal</b>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
<b>Consejo General</b>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
<b>DEPPP</b>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.
<b>DESPEN</b>	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
<b>Empresa Consultora</b>	M.C.J.Z. Consultores y Constructores S.A. de C.V.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

<b>Estatuto</b>	Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal de la Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral.
<b>INE/Instituto</b>	Instituto Nacional Electoral.
<b>Junta Local</b>	Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí.
<b>Junta General Ejecutiva</b>	Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
<b>Lineamientos</b>	Lineamientos para regular el procedimiento de conciliación de conflictos laborales, el laboral sancionador y el recurso de inconformidad.
<b>LGIPE</b>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
<b>Ley de Medios</b>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
<b>PLS</b>	Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED].
<b>PRD</b>	Partido de la Revolución Democrática.
<b>RI</b>	Recurso de inconformidad INE/RI/SPEN/1/2024.
<b>Sala Superior</b>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
<b>SPEN</b>	Servicio Profesional Electoral Nacional.

**A N T E C E D E N T E S**

**A) Procedimiento Laboral Sancionador**

**1) Hechos denunciados.** El 15 de enero de 2021, a través del oficio INE/DESPEN/DID/SIN/002/2021, la DESPEN hizo del conocimiento de la Dirección Jurídica el escrito presentado por la parte denunciante, mediante el cual se informaron las conductas infractoras atribuibles al recurrente.

**2) Radicación de la denuncia.** El 19 de enero de 2021, la Dirección Jurídica dictó el auto de radicación, por el cual se recibió y registró la denuncia bajo el expediente INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED].

## RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024

**3) Inicio del procedimiento laboral sancionador.** El 8 de julio de 2021, la Dirección Jurídica dictó el auto de inicio del procedimiento laboral sancionador en contra de las personas denunciadas, entre ellas al ahora recurrente, atribuyéndole las conductas siguientes<sup>1</sup>:

“(…) han incurrido en la conducta prohibitiva de desempeñar otro empleo, cargo, comisión o cualquier otra actividad remunerada ajenos al Instituto, durante el horario laboral establecido, toda vez que como miembros del Servicio deben desempeñar sus funciones en forma exclusiva.”

“(…) han incurrido en probables conductas constitutivas de realizar actos que acrediten actuación parcial a favor de partidos políticos.”

**4) Resolución, contestación, admisión y desahogo de pruebas.** El 29 de julio de 2021, el recurrente presentó escrito de contestación, el 11 de agosto siguiente, la autoridad instructora dictó el auto de admisión de pruebas, el cual se notificó al probable infractor el 13 de agosto de 2021.

**5) Cierre de Instrucción.** El 23 de mayo de 2022, la autoridad instructora dictó auto de cierre de instrucción del PLS, mismo que fue notificado al quejoso el 24 de mayo siguiente.

**6) Resolución del procedimiento laboral sancionador.** El 11 de julio de 2022, el titular de la Secretaría Ejecutiva emitió la resolución del PLS, en cuyos puntos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO determinó lo siguiente:

**“PRIMERO.** Han quedado acreditadas las conductas infractoras atribuidas a [REDACTED], previstas en los artículos 71 fracciones II, XXII y XXIII, 72, fracciones III y XXI; 172 y 173 del Estatuto, por lo que resultan acreedores de la sanción consistente en **DESTITUCIÓN.**

**SEGUNDO.** Han quedado acreditadas las conductas infractoras atribuidas a [REDACTED], previstas en los artículos 71 fracciones II y XXIII, y 72, fracción III del Estatuto, por lo que resulta acreedora de la sanción consistente en **DESTITUCIÓN.**

**TERCERO.** Se **ABSUELVE** a [REDACTED], de la conducta imputada establecida en los artículos 72, fracción XXI, 172 y 173, del Estatuto.”

**7) Notificación de la resolución.** El 7 de diciembre de 2023 se notificó la resolución al ahora recurrente.

---

<sup>1</sup> Visible en la página 6 del Auto de Inicio del PLS INE/DJ/HASL/[REDACTED] del 8 de julio de 2021.

## RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024

### B) Recurso de Inconformidad

**8) Escrito de recurso de inconformidad.** En contra de lo anterior, el 4 de enero de 2024, el ahora recurrente presentó en las oficinas de la Junta Local, escrito mediante el cual promueve recurso de inconformidad.

**9) Segundo periodo vacacional.** Del 18 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024<sup>2</sup> transcurrió el segundo período vacacional del personal del INE.

**10). Acuerdo de turno.** El 12 de enero de 2024, la Dirección Jurídica ordenó formar el expediente **INE/RI/SPEN/1/2024** y lo turnó a la **DEPPP**, para que sea quien sustancie el recurso y elabore el proyecto de resolución que corresponda, además de ordenarse el envío de las constancias que integran el expediente del PLS.

**11) Admisión del recurso y proyecto de resolución.** En su oportunidad, al cumplirse con los requisitos de procedibilidad cronológica, objetiva y formal, establecidos en los artículos 358, 359, 360, 361 y 365 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se admitió el escrito de recurso de inconformidad, y al no haber pruebas que desahogar ni actuaciones que realizar se ordenó el cierre de instrucción y la elaboración del proyecto de resolución.

## CONSIDERANDOS

### PRIMERO. COMPETENCIA.

Esta Junta General Ejecutiva es competente para conocer y resolver el presente recurso de inconformidad, en términos de lo establecido por los artículos 41, Base V, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución federal; 48, párrafo 1, incisos k) y o), 202, 203 y 204 de la LGIPE; 360, fracción I, del Estatuto, y 52, numerales 1 y 2, de los Lineamientos, por tratarse de una resolución emitida Encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, en el expediente INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED], a través del cual se determinó sancionar a la parte recurrente con la destitución al haberse acreditado diversas faltas al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa.

---

<sup>2</sup> Puede verificarse en el aviso que se publicó en el Diario Oficial de la Federación consultable en [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5710210&fecha=01/12/2023#gsc.tab=0](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5710210&fecha=01/12/2023#gsc.tab=0)

## **RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

### **SEGUNDO. REQUISITOS DE PROCEDENCIA.**

El recurso de inconformidad cumple con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 358, 359, 361 y 365, del Estatuto en los siguientes términos:

#### **A) Forma.**

El escrito de demanda se presentó por escrito ante la Junta Local; en el recurso se hace constar el nombre completo y firma de la persona recurrente, así como la dirección de correo electrónico que autorizan para oír y recibir notificaciones, se identifica la resolución que impugna, así como la fecha de su notificación y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que basa su impugnación, los agravios que le causa y los preceptos presuntamente violados, así como las pruebas que ofrece.

#### **B) Legitimación e interés jurídico.**

La demanda de recurso de inconformidad fue interpuesta por propio derecho y en su calidad de miembro del SPEN en contra de la resolución dictada el 11 de julio de 2022, emitida por la Secretaría Ejecutiva, en el PLS, a quien se le sancionó con la destitución al haberse acreditado las infracciones al Estatuto, por lo que cuenta con legitimación e interés jurídico al resentir una afectación directa, en su esfera jurídica.

#### **C) Oportunidad.**

La demanda fue presentada en tiempo y forma, toda vez que el acto controvertido fue notificado personalmente al ahora recurrente, el 7 de diciembre de 2023, surtiendo efectos el mismo día, según lo previsto en el artículo 281, párrafo segundo, del Estatuto.

De ahí que, el plazo de diez días hábiles para impugnar la resolución del procedimiento laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 361 del Estatuto, transcurrió del 8 de diciembre de 2023 al 8 de enero de 2024, ello sin considerar los días inhábiles (sábados y domingos), así como el segundo período vacacional<sup>3</sup>, según lo previsto en el artículo 279, párrafo segundo, del Estatuto.

---

<sup>3</sup> Del 18 de diciembre al 2 de enero de 2024, según puede consultarse en la publicación del Diario Oficial de la Federación visible en [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5710210&fecha=01/12/2023#gsc.tab=0](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5710210&fecha=01/12/2023#gsc.tab=0)

## RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024

En este sentido, si el medio de impugnación fue presentado el 4 de enero de 2024 ante la Junta Local, resulta evidente que la misma aconteció dentro del plazo de 10 días hábiles que prevé el artículo 361 del Estatuto<sup>4</sup>, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
DICIEMBRE DE 2023						
			7 Notificación de Resolución	8 Cómputo día 1	9 Día Inhábil	10 Día Inhábil
11 Cómputo día 2	12 Cómputo día 3	13 Cómputo día 4	14 Cómputo día 5	15 Cómputo día 6	16 Día Inhábil	17 Día Inhábil
18 Día Inhábil	19 Día Inhábil	20 Día Inhábil	21 Día Inhábil	22 Día Inhábil	23 Día Inhábil	24 Día Inhábil
25 Día Inhábil	26 Día Inhábil	27 Día Inhábil	28 Día Inhábil	29 Día Inhábil	30 Día Inhábil	31 Día Inhábil

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
ENERO DE 2024						
1 Día Inhábil	2 Día Inhábil	3 Cómputo día 7	4 Cómputo día 8 Presentación del Recurso de Inconformidad	5 Cómputo día 9	6 Día Inhábil	7 Día Inhábil
8 Cómputo día 10	9	10	11	12	13 Día Inhábil	14 Día Inhábil

### TERCERO. Cuestión Previa.

#### 3.1 Caducidad.

Como cuestión previa, se analizará de oficio la caducidad de la facultad sancionatoria del INE para condenar las posibles conductas infractoras dentro de un procedimiento laboral, ello de conformidad con el criterio de la Sala Superior

<sup>4</sup> Artículo 361. El recurso de inconformidad podrá presentarse ante el órgano desconcentrado de su adscripción o, en su caso, directamente ante la Oficialía de partes común del Instituto, dentro de los diez días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se recurra, a fin de que lo remitan a la Dirección Jurídica para los efectos previstos en este Capítulo. La interposición del recurso ante otra instancia no interrumpirá el plazo señalado, ni suspenderá la ejecución de la determinación controvertida.

## **RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

contenido en las tesis relevantes XXIV/2013, de rubro: “CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO”, y XVI/2001, de rubro: “CADUCIDAD. SUS PRINCIPIOS RIGEN PARA LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES”<sup>5</sup>.

Con base en lo previsto en el artículo 310 del Estatuto, la facultad para determinar el inicio del procedimiento laboral sancionador caduca en el plazo de seis meses, el cual debe contabilizarse a partir de que la autoridad instructora tenga conocimiento del acto presuntamente irregular. En adición, el artículo 280 del mismo ordenamiento, prevé que los plazos fijados en meses se toman conforme a día calendario.

Cabe precisar que, el artículo 319 del Estatuto prevé que, el procedimiento laboral puede iniciarse de oficio o a petición de parte, en el primer caso (oficio), ocurre cuando cualquiera de las áreas u órganos del INE hacen del conocimiento de la autoridad instructora la posible comisión de conductas infractoras; en el segundo supuesto (petición de parte), opera cuando existe una denuncia en contra de alguna persona servidora pública del Instituto.

El artículo 320, primer párrafo, del Estatuto determina que cuando la autoridad instructora tenga conocimiento de la probable comisión de una falta laboral, iniciará una etapa preliminar de investigación, en la que se recabarán las pruebas necesarias para determinar si ha lugar al inicio del procedimiento laboral sancionador.

Mientras que, el artículo 321, primer párrafo, del Estatuto contempla que si la autoridad instructora considera que existen elementos suficientes para determinar que existe la conducta infractora y su probable responsabilidad, ordenará el inicio del procedimiento laboral sancionador; asimismo, el artículo 323, determina que el auto de inicio es el acto con el que formalmente comienza el procedimiento.

Con base en la normativa señalada, la autoridad instructora tiene un plazo de seis meses, contados a partir de que recibió la noticia de una probable falta en materia laboral para realizar las diligencias correspondientes y finalizar la investigación, ello con el propósito de tener los elementos para emitir el auto que dé inicio al procedimiento.

---

<sup>5</sup> Al respecto, cabe precisar que la consulta de los criterios de tesis relevantes y jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede realizarse en el portal de internet: <https://www.te.gob.mx/ius2021/#/>

## **RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

En este orden de ideas, del análisis que se hizo al acuerdo de inicio del PLS, se advierte que la autoridad instructora tuvo conocimiento de los hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad laboral el 15 de enero de 2021, por lo tanto, son esas fechas la que marcan el inicio del cómputo del plazo previsto en el artículo 310 del Estatuto.

Es por lo anterior que, el plazo de los 6 meses para ordenar el inicio del procedimiento laboral sancionador concluía el 15 de julio de 2021, por lo que, si el acuerdo de inicio se emitió el 8 de julio de 2021, resulta evidente que no se excedió el plazo de seis meses para iniciar el procedimiento, en consecuencia, no caducó la facultad sancionatoria, por lo que, resulta procedente el análisis de los motivos de inconformidad aducidos en el presente recurso.

### **CUARTO. Estudio de fondo.**

#### **Resumen de la resolución impugnada.**

Con fecha 11 de julio de 2022, la Secretaría Ejecutiva, en su carácter de autoridad resolutoria, emitió la resolución respecto del procedimiento laboral sancionador identificado con el expediente INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED], al tenor siguiente:

La controversia se relacionó con dilucidar si la parte denunciada desempeñó otro empleo, cargo, comisión o cualquier otra actividad remunerada ajenos al Instituto, durante el horario laboral establecido; realizó actos que acrediten una actuación parcial a favor de partidos políticos, al formar parte de la Empresa Consultora; así como no haberse excusado de participar en cualquier actividad u operación que pudiese representar un conflicto de intereses ya que la empresa consultora tuvo erogaciones con el PRD.

Asimismo, determinar si con las conductas señaladas, dejó de ejercer sus funciones con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, aunado a dejar de observar y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución, la Ley, el Estatuto, reglamentos, acuerdos, convenios, circulares, lineamientos y demás normativa que emitan los órganos competentes del Instituto.

En relación a los denunciados, la autoridad electoral consideró que de las constancias del expediente no se advertía la existencia de elemento alguno relativo con la revocación del mandato de representación que se le confirió al momento de la constitución de la Empresa Consultora.



## **RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

Al momento en que se protocolizó la venta de las acciones que como socios (ahora recurrente) tenían, no les fue revocado el poder que se les había otorgado, tomando en cuenta que no existe manifestación expresa de dicha cuestión, aunado a que no existe constancia o documento alguno en el que conste que dicha calidad les fue retirada, por tanto, se resolvió que el denunciado aún funge como apoderado legal de dicha empresa, lo cual les otorga poderes amplios de representación.

Por lo que respecta al acta del 27 de mayo de 2016, que obra en el expediente como prueba de descargo, se observa que la misma carece de valor probatorio pleno para acreditar que desde esa fecha los denunciados dejaron de formar parte de la Empresa Consultora.

Lo anterior, porque dicha prueba consiste en una certificación en la cual únicamente el notario público coteja que la copia fotostática exhibida corresponde al documento denominado Acta circunstanciada y es fiel reproducción de su original, dando fe de haberla tenido a la vista el 21 de julio de 2021, por lo que su alcance probatorio, contrario a lo que señalan los denunciados, no puede ser el de acreditar que desde esa fecha dejaron de ser accionistas de la Empresa Consultora, sino que, dicho documento solo certifica que la copia fotostática es fiel reproducción de su original y que solo tiene el efecto de acreditar la identidad de lo cotejado con el documento exhibido ante el notario.

Respecto del instrumento notarial 36591, de 26 de julio de 2017, relacionado con la protocolización de las determinaciones adoptadas en la acta de asamblea general extraordinaria de accionistas del 19 de julio de 2019, relativas a la venta de las acciones de las que eran propietarios los probables infractores, sí tiene el alcance y valor probatorio pretendido por los denunciados, en tanto que la misma acredita fehacientemente que a partir del 26 de julio de 2017 dejaron de ser socios de la empresa consultora; sin embargo no se les desvincula o se les revoca de su carácter de apoderados.

También, la autoridad electoral consideró que los denunciados realizaron una actuación parcial a favor de partidos políticos al formar parte de la Empresa Consultora, debido a no haberse excusado de participar en cualquier actividad u operación que pudiera representar un conflicto de intereses, pues de la investigación realizada se constató que la empresa tuvo ingresos derivados de servicios prestados al PRD.

## **RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

Lo relativo a que nunca revisaron los egresos del PRD, lo cierto es que, de conformidad con la norma estatutaria, al advertirse la existencia de actividades u operaciones que pudieran representar un conflicto de intereses, los servidores del Instituto se encuentran obligados a excusarse de participar en los mismos, lo anterior a fin de que dichas actividades no sean consideradas como una actuación parcial en favor de los partidos políticos, por lo que si la empresa de la que eran socios y son apoderados realizó actividades remuneradas y celebró contratos con el PRD, mientras ellos desempeñaban cargos dentro del INE, resulta posible la existencia de un interés personal y económico derivado de la relación con el partido político, lo cual se considera afecta la imparcialidad de las actividades que desempeñaron en su relación contractual para con el INE.

Lo anterior implica dejar de ejercer sus funciones con estricto apego a los principios rectores de la función electoral.

En ese sentido se resolvió que los denunciados infringieron el principio rector de imparcialidad, al formar parte de una empresa que prestó servicios a un partido político en tanto que al mismo tiempo prestaba sus servicios al Instituto, y determinar si su actuar fue irregular y proclive a generar un beneficio para un partido político.

También se consideró que los denunciados incurrieron en vulneración a los principios de autonomía e independencia, puesto que las decisiones y actos emitidos por el Instituto deben ser imparciales y en estricto apego a la norma, sin que estas se sometan a presiones de agentes externos, por lo que la parte denunciada vulneró este principio, al tener la calidad de socio y apoderado de una empresa que prestó sus servicios de consultoría a un partido político, por lo tanto debió excusarse ante el conocimiento de conductas en las que tenía un posible interés personal.

En consecuencia, la conducta se califica como muy grave, atendiendo al grado de que pudiera afectar el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones, lo que constituye un elemento de la conducta prohibitiva de realizar actos que acrediten una actuación parcial a favor de partidos políticos.

Por tanto, dada la gravedad de la comisión de la falta, así como el grado de afectación al bien jurídico protegido, se resolvió imponer a la parte denunciada, la medida disciplinaria de destitución del empleo, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracciones II, XXII y XXIII, 72, fracciones III y XXI; 172 y 173, del Estatuto.

## RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024

### **Síntesis de agravios.**

Previo al estudio de fondo del presente medio de defensa, resulta pertinente señalar que, conforme con lo establecido en el artículo 365 del Estatuto, el escrito mediante el cual se interponga el recurso de inconformidad deberá contener, entre otros, los agravios, los argumentos de derecho en contra de la resolución que se recurre y el señalamiento de las pruebas que se ofrezcan.

En ese contexto, de la revisión integral al escrito de inconformidad presentado, se advierten que la parte actora expone los siguientes motivos de agravio:

#### **1.- La falta de notificación del cierre de instrucción del procedimiento laboral.**

En relación a este apartado, la parte actora sostiene que le genera perjuicio al debido proceso la falta de notificación del cierre de instrucción del procedimiento laboral sancionador instaurado en su contra, lo que denota en una falta de oportunidad para combatir cualquier omisión derivada de la sustanciación del procedimiento, para en su caso, ordenar la reposición del mismo.

Asimismo, refiere que la última información de la cual tuvo conocimiento fue que estaba en tiempo para presentar alegatos y, una vez que lo hizo, no se le informó siquiera la recepción de estos.

Lo anterior, señala el inconforme constituye una violación a lo previsto en los numerales 344 a 347 del Estatuto.

**2. La indebida notificación de la resolución impugnada.** Aduce que la resolución del procedimiento referido, le fue notificado habiendo transcurrido más de un año de su emisión, esto es, la determinación aludida fue emitida el 11 de julio de 2022, mientras que ésta le fue notificada hasta el 7 de diciembre de 2023, además, de que fue notificada en un domicilio diverso al que señaló en sus oficios de solicitud, pues afirma que en ningún momento mencionó para tal efecto, una dirección en Jalisco, ya que fue consistente en establecer su domicilio en San Luis Potosí.

**3. Indebida valoración probatoria y falta de exhaustividad.** Sostiene el inconforme que la autoridad realizó un indebido estudio del material probatorio, así como la omisión de llevar a cabo una investigación exhaustiva y robusta de los hechos tildados de irregulares, toda vez que fundamentó sus acusaciones en meras suposiciones sin acreditarlas de manera fehaciente, ya que se resuelve que ostentó la calidad de apoderado legal de la Empresa Consultora, sin tomar en consideración que dejó de ser socio de la misma desde el 26 de julio de 2017.

## RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024

También afirma el ahora recurrente que contrario a lo resuelto en los autos del sumario no existe constancia alguna que acredite su participación al interior de la citada empresa. De igual manera, señala la parte actora que la responsable es omisa en precisar en que contratos o asuntos se ostentó como apoderado legal del ente de referencia.

Sostiene el inconforme que en el periodo comprendido del 6 de junio de 2016 al 28 de febrero de 2021 no realizó actos jurídicos como apoderado de la Empresa Consultora y los partidos políticos en el estado de San Luis Potosí, toda vez que los mismos fueron celebrados por el Administrador Único y, en el periodo comprendido de julio de 2017 a febrero de 2021 los contratos fueron suscritos por los únicos dos socios de la empresa, es decir, contrario a lo resuelto no se observa participación alguna de su parte, tal circunstancia puede corroborarse con la investigación realizada por el Órgano Interno de Control del INE.

Así, la parte actora afirma que la responsable es omisa en acreditar que hubiere realizado actos de administración, riguroso dominio o incluso poder cambiario a favor de la Empresa Consultora.

Por otro lado, la parte actora aduce que de las pruebas del expediente se acredita de manera fehaciente que su trabajo como Enlace de Fiscalización siempre se ajustó a los principios rectores de la materia electoral, entre ellos, el de profesionalismo, es decir, sin parcialidad a favor o en contra de determinado partido político.

**4. Falta de acreditación de un beneficio económico.** En relación a este apartado, sostiene el inconforme que la autoridad responsable no acreditó el supuesto beneficio económico a su favor, ni tampoco algún menoscabo pecuniario del patrimonio del Instituto, toda vez que del informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no se desprendió cantidad alguna adicional a su ingreso obtenido diferente a su salario recibido por su trabajo en el INE, así como tampoco de su cónyuge, ni de ningún otro familiar durante el periodo comprendido del 2016-2020.

De igual manera señala que, de las declaraciones patrimoniales de la Empresa Consultora, no se desprende que existieran dividendos o pagos realizados hacia su persona durante el periodo 2016-2020.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

**5. Falta de acreditación de las infracciones.** Al respecto, el ahora inconforme señala que la autoridad no precisa, ni acredita las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos infractores, ya que si bien participó de la creación de la Empresa Consultora no tuvo injerencia en la celebración de las contrataciones entre la mencionada y los partidos políticos en San Luis Potosí, por lo que no existió un tipo de interés personal o económico, tal y como fue informado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que dejó de ser socio de la misma desde el 26 de julio de 2017.

También, sostiene la parte actora que contrario a lo resuelto por la autoridad responsable nunca tuvo la responsabilidad de revisar los informes presentados por el PRD en San Luis Potosí, además que no se encuentra acreditado en las constancias del procedimiento laboral que en el desempeño de sus funciones hubiere sido de manera parcial, por el contrario, su trabajo siempre estuvo supervisado por el superior jerárquico y por el personal de la UTF.

**6. La ausencia del pago de compensación.** Señala el recurrente que la determinación controvertida vulnera lo previsto en el artículo 349 del Estatuto, que establece que la persona sujeta al procedimiento que se separe o sea separada por cualquier forma del Instituto. sin que el procedimiento haya concluido, no será considerada para el pago de compensación que le corresponda.

Por tanto, la parte actora que la determinación impugnada no es legalmente adecuada ni aplicable, por lo que debe ser revocada con apoyo en lo resuelto por el Órgano Interno de Control del INE.

**Fijación de la controversia.**

Derivado de las consideraciones previstas en el punto que antecede, se advierte que la controversia en el presente asunto se constriñe a determinar si existe omisión en el análisis y valoración de los medios de convicción que obran en la resolución del Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED], así como de los argumentos hechos valer por el inconforme, a efecto de emitir la resolución recurrida.

**Análisis.**

Precisados los motivos de inconformidad, esta Junta General Ejecutiva procede a realizar el estudio de los agravios que hace valer la parte recurrente.

## **RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

Por cuestión de método, los agravios de la parte recurrente se analizarán de conformidad con el orden temático expuesto, toda vez que los planteamientos comparten una misma finalidad, sin que ello le depare un perjuicio en su esfera jurídica, toda vez que, lo jurídicamente relevante es que la totalidad de las alegaciones sean estudiadas dentro la presente resolución<sup>6</sup>.

En tal sentido, esta autoridad deberá atender al resultado de la investigación y de las pruebas recabadas y analizadas por las autoridades instructora y resolutora, tomando en consideración las circunstancias particulares del asunto en estudio, así como la naturaleza misma de la infracción que se analiza, se tomarán en cuenta las pruebas que permitan conocer la verdad de los hechos y, en su caso tener por acreditada o no la conducta infractora y, en consecuencia, se confirme o no el fallo correspondiente.

### **I. Marco normativo.**

De conformidad con el artículo 3, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se entiende por conflicto de interés, la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las personas servidoras públicas debido a intereses personales, familiares o de negocios.

En términos del artículo 7, fracciones IX y XI, de la misma ley, las personas servidoras públicas observarán, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, entre otras directrices, deberán evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones, así como separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esa Ley, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión.

Con base en el artículo 71, fracciones II, XXII y XXIII, del Estatuto, son obligaciones del personal del INE, entre otras, ejercer sus funciones con estricto apego a los principios rectores de la función electoral; excusarse de participar en cualquier actividad u operación que pudieran representar un conflicto de intereses, y observar y hacer cumplir las disposiciones de la CPEUM, la LGIPE, el propio Estatuto,

---

<sup>6</sup> Ello de conformidad con la jurisprudencia 4/2000, emitida por la Sala Superior, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN".

## RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024

reglamentos, acuerdos, convenios, circulares, lineamientos y demás normativa que emitan los órganos competentes del INE.

De acuerdo con el artículo 72, fracciones III y XXI, del Estatuto, queda prohibido al personal del INE, ente otros supuestos, realizar actos que acrediten una conducta parcial a favor o en contra de partidos, agrupaciones u organizaciones políticas, de las personas que los dirigen, candidaturas o militancia, así como de candidaturas independientes, así como desempeñar otro empleo, cargo o comisión durante el horario laboral establecido en el INE, salvo lo previsto en el artículo 172 del propio ordenamiento.

El artículo 172 del Estatuto indica que las personas del SPEN desempeñarán sus funciones en forma exclusiva dentro del Servicio y no podrán desempeñar otro empleo, cargo, comisión o cualquier otra actividad remunerada ajenos al INE, durante el horario laboral establecido. Las actividades académicas quedarán exceptuadas de dicha prohibición cuando sean autorizadas por la DESPEN.

Con fundamento en el artículo 173 del Estatuto, las y los miembros del Servicio Profesional Electoral deberán, entre otras, conducir su actuación conforme a los principios rectores de la función electoral.

Es preciso mencionar que los artículos 23 y 24 del Código de Conducta del INE señalan como estándares de conducta de este Instituto, el revelar cualquier relación que pueda provocar un conflicto de interés con su función, así como eludir participar en actividades que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de su función.

En relación al **primer motivo de agravio** relacionado con la falta de notificación del cierre de instrucción del procedimiento laboral, lo que en concepto de la parte actora denota en una falta de oportunidad para combatir cualquier omisión derivada de la sustanciación del procedimiento, para en su caso, ordenar la reposición del mismo.

Al respecto, esta Junta General Ejecutiva considera que tales alegaciones resultan **inoperantes** de conformidad con lo siguiente.

En principio se destaca que de conformidad con lo previsto en los artículos 358, 360, fracción I, y 364, fracción V, del Estatuto, el recurso de inconformidad procede en contra de las resoluciones emitidas por las autoridades instructora y resolutora en el Procedimiento Laboral Sancionador que formal y materialmente den por terminado el procedimiento.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

En el caso, del escrito de inconformidad, se advierte que el ahora recurrente impugna la falta de notificación del cierre de instrucción del procedimiento laboral, actuación procesal que forma parte de la sustanciación del citado Procedimiento, por lo que no se encuentra en las hipótesis previstas en el artículo 360, fracción I, en relación con el 358 del Estatuto; toda vez que no se trata de una resolución que ponga fin al Procedimiento Laboral Sancionador, ni de una determinación de la autoridad instructora que decrete el no inicio del procedimiento o su sobreseimiento.

Esto es así, porque los acuerdos que emite la autoridad instructora durante la sustanciación del Procedimiento Laboral son de carácter preparatorio, y exclusivamente surten efectos internos o intraprocesales, por lo que su emisión no tiene el carácter de ser definitiva.

Al respecto, la Sala Superior en diversas sentencias<sup>7</sup> ha sostenido que los efectos de los actos como la radicación o admisión de un procedimiento únicamente son intraprocesales. Si bien este tipo de determinaciones son susceptibles de incidir sobre derechos adjetivos o procesales, no producen una afectación directa e inmediata sobre los derechos sustantivos de las partes en el procedimiento, en tanto que los efectos que generan se vuelven definitivos hasta que son empleados por la autoridad responsable en la emisión de la resolución final correspondiente.

Así, los vicios procesales que se materializan en el marco de un proceso podrían no traducirse en un perjuicio sobre el derecho sustantivo o interés de quienes están sujetos al mismo. A pesar de la presunta materialización de violaciones sobre derechos procesales, es factible que se emita una determinación definitiva en la que se resuelva a favor del interesado, o bien, que no trasciendan al resultado del procedimiento sancionador.

Sirve como sustento lo sostenido por la Sala Superior en la jurisprudencia 1/2004, de rubro: *“ACTOS PROCEDIMENTALES EN EL CONTENCIOSO ELECTORAL. SÓLO PUEDEN SER COMBATIDOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, A TRAVÉS DE LA IMPUGNACIÓN A LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO.”*, así como en la tesis I.1o.A.E. J/4 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, de rubro: *“ACTOS O VIOLACIONES*

---

<sup>7</sup> SUP-JDC-744/2023.



## RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024

### *INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS.”*

Ahora, no pasa–desapercibido para esta autoridad electoral que contrario a lo esgrimido por la parte actora, de las constancias que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el ahora recurrente sí fue notificado del cierre de instrucción dictado en el Procedimiento Laboral en que se actúa, al tenor de la actuación realizada por el Jefe de Departamento de Sustanciación A, de la Dirección de Asuntos HASL el 24 de mayo de 2022 a las 5:38 p.m. mediante correo electrónico<sup>8</sup>.



Al respecto se destaca que, si bien no se le notificó de manera personal dicha actuación procesal, la misma atiende a lo establecido en el Considerando III, inciso a), del Acuerdo INE/CG185/2020 emitido por el Consejo General, en el que se estableció que en la etapa de investigación e instrucción de los procedimientos laborales disciplinarios, las notificaciones se realizaran preferentemente de manera electrónica a través del correo electrónico institucional, con la finalidad de cumplir con las medidas implementadas por las autoridades sanitarias para evitar posibles contagios en ese momento.

Asimismo, se le hizo sabedor que, de no haber remitido accuse por el mismo medio, se tendría por notificada tal determinación con la fecha y hora de confirmación de entrega del correo que emita el sistema. De ahí, lo **inoperante** del motivo de inconformidad que se analiza.

<sup>8</sup> Documental pública que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 329 y 330 del Estatuto, así como 14, párrafo 4, inciso b), y 16, párrafos 1 y 2, de la Ley de Medios (de aplicación supletoria en términos de lo señalado en el artículo 289, fracción V, del Estatuto).

## RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024

Ahora, el motivo de agravio identificado con el **punto dos** de la síntesis respectiva, relacionado con la indebida notificación de la resolución impugnada, en razón de que la misma le fue hecha de su conocimiento habiendo transcurrido más de un año de su emisión, esto es, la determinación aludida fue emitida el 11 de julio de 2022, mientras que ésta le fue notificada hasta el 7 de diciembre de 2023, además, de que fue realizada en un domicilio diverso al que señaló en sus oficios de solicitud, pues afirma que en ningún momento mencionó para tal efecto, una dirección en Jalisco, ya que fue consistente en establecer su domicilio en San Luis Potosí.

Esta autoridad administrativa electoral considera que tal alegación deviene **inoperante** de conformidad con lo siguiente.

Esta autoridad administrativa electoral considera que, con independencia de que tuviera o no razón en cuanto al supuesto retraso en la notificación de la resolución materia de impugnación, atendiendo a la razón esencial de la jurisprudencia J/49 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ACTO ADMINISTRATIVO. SU VALIDEZ Y EFICACIA NO SE AFECTAN CON MOTIVO DE "ILEGALIDADES NO INVALIDANTES" QUE NO TRASCIENDEN NI CAUSAN INDEFENSIÓN O AGRAVIO,<sup>9</sup> así también se desprende que en un medio de impugnación resulta insustancial la ilegalidad de un acto de autoridad si no se traduce en un perjuicio que afecte a quien demanda.<sup>10</sup>

Lo primero que debe destacarse es que, si bien la parte actora considera que se le perjudica el retraso de la notificación de la resolución dictada en el Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED] por parte del INE, lo cierto es que no le impactó en su derecho a impugnar vía recurso de inconformidad.

Por otro lado, tal y como se encuentra acreditado en autos del expediente, la otrora Dirección Jurídica realizó las gestiones necesarias para llevar a cabo dicha notificación, como a continuación se evidencia:

1. El día 9 de agosto de 2022, se envió un correo electrónico a la cuenta institucional del ahora recurrente, mediante el cual, se le remitió la Resolución recaída al Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED]; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Considerando III, inciso b), del Acuerdo INE/CG185/2020 emitido por el Consejo General de este Instituto, en el que se estableció que en la etapa de resolución de los

---

<sup>9</sup> Registrada con folio digital 171872 y consultable en link <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/171872>.

<sup>10</sup> SCM-JDC-190/2024.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

procedimientos laborales disciplinarios, las notificaciones se llevarán a cabo preferentemente de manera electrónica a través del correo electrónico institucional, con la finalidad de cumplir con las medidas sanitarias implementadas por las autoridades sanitarias durante la contingencia que prevaleció en esos momentos.

2. Además, en esa misma fecha, mediante el oficio número INE/DJ/9510/2022, se requirió a la entonces Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva de Jalisco, para que girara sus instrucciones a fin de notificarle personalmente la resolución antes señalada a la parte recurrente.
3. El 12 de agosto de 2022, la mencionada funcionaria informó que no pudo ser notificada la resolución al ahora recurrente, en virtud de que al acudir al domicilio que se tenía registrado en la Coordinación Administrativa de esa Junta Local, no se localizó persona alguna en el inmueble, por lo que sostuvo una llamada telefónica con la persona objeto de notificación, quien le informó que desde hace tiempo se encuentra viviendo en la ciudad de San Luis Potosí, aunado a lo anterior, le comentó que dentro del expediente laboral sancionador señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones una finca en dicha ciudad.
4. El 13 noviembre de 2023, el recurrente ingresó un escrito en la Oficialía de Partes Común de este Instituto, mediante el cual, señaló un domicilio ubicado en la Ciudad de México para que se le practicara la notificación de entre otras cuestiones, el Procedimiento Laboral, al tenor de lo siguiente.

*“(…)*

*Que vengo por medio del presente exordio a solicitar de Ustedes, tengan a bien ordenar a quien corresponda el que, de manera inmediata, se me notifique de manera personal y legal en el domicilio antes señalado, los siguientes acuerdos y/o resoluciones:*

*1).- El acuerdo y/o resolución, emitido con fecha 11 de julio del 2022, por el C. SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, mediante el cual determinó la destitución del Suscrito como Servidor Público al*

*[REDACTED]; acuerdo que, sin que exista a la fecha ninguna fundamentación, ni justificación, ni motivación jurídica aplicable EL PORQUÉ NO SE ME HA NOTIFICADO DE MANERA PERSONAL NI LEGAL, violando con ello de manera notoria y flagrante mis Derechos Humanos.*

*(…)”*

**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

5. El 30 de noviembre de 2023, mediante el oficio INE/DJ/18122/2023, suscrito por la Directora de Asuntos de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral adscrita a la entonces Dirección Jurídica, reiteró a la Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, el requerimiento realizado mediante el oficio número INE/DJ/9510/2022, señalado en el **numeral 2**.
6. El 4 de diciembre de 2023, el [REDACTED], en cumplimiento a lo anterior remitió el Acta Circunstanciada número AC021/INE/JAL/JLE/VS/01-12-2023, mediante la cual informó que no le fue posible realizar la diligencia de notificación al ahora recurrente.
7. Así, ante la imposibilidad para llevar a cabo la notificación de la resolución del Procedimiento Laboral por parte de la citada Junta, y toda vez que el propio recurrente señaló nuevo domicilio para recibir y oír notificaciones, se procedió a notificarle la Resolución dictada en el expediente INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED] en el domicilio ubicado en la Ciudad de México.
8. Lo cual, tuvo verificativo el 7 de diciembre del 2023, previo citatorio del día anterior.

Lo anterior, resulta relevante en la medida que no existe un estado de indefensión de la parte promovente, tomando en cuenta que según se razonó en el **Considerando Segundo** su escrito de demanda resulta oportuno, pues si bien existió dilación en la notificación de la resolución, y que esta no fue realizada en el plazo previsto en el artículo 347, párrafo segundo, del Estatuto, lo cierto es que fue derivado de las imposibilidades de notificación señaladas, y ello no constituye una violación procesal, dado que el recurso que nos ocupa tiene como objetivo confirmar, modificar o revocar la resolución emitida en el Procedimiento Laboral Sancionador.

Al efecto, resulta aplicable la tesis: SENTENCIA. ILEGALIDAD DE SU NOTIFICACIÓN, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página 1296, de la Décima Época, Tesis: VII.1o.C.6 K (10a.), liga electrónica: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006943>.

## RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024

Atendiendo a esto, debe decirse que si quien presenta la demanda lo hace de forma oportuna, <sup>12</sup> entonces, el actuar que acontece al interior del INE y que concluye con la notificación de la resolución no generó perjuicio alguno a sus derechos.

Lo anterior se afirma, toda vez que incluso con el retraso se realizó la notificación de la resolución correspondiente, aunado a que este proceder jamás mermó el plazo de diez días con los que cuenta para presentar su demanda de recurso de inconformidad.

En lo relativo a los motivos de agravio señalados en los **puntos tres, cuatro y cinco** de la síntesis respectiva, relacionados con la indebida valoración del material probatorio, así como llevar a cabo una investigación exhaustiva y robusta de los hechos tildados de irregulares, toda vez que fundamentó sus acusaciones en meras suposiciones sin acreditarlas de manera fehaciente, así como lo relativo a que la responsable no acreditó el supuesto beneficio económico a su favor, ni tampoco algún menoscabo pecuniario del patrimonio del Instituto; además de que la autoridad responsable no precisa, ni acredita las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos infractores, ya que dejó de ser socio de la misma desde el 26 de julio de 2017.

Esta Junta General Ejecutiva considera que tales alegaciones resultan **infundadas**, de conformidad con lo siguiente.

La parte actora sostiene que dejó de ser socio de la Empresa Consultora desde el 26 de julio de 2017, que no existe constancia alguna que acredite su participación al interior de la citada empresa, así como que en el periodo comprendido del 6 de junio de 2016 al 28 de febrero de 2021 no realizó actos jurídicos como apoderado de la Empresa Consultora y los partidos políticos en el estado de San Luis Potosí, toda vez que los mismos fueron celebrados por el Administrador Único y, en el periodo comprendido de julio de 2017 a febrero de 2021 los contratos fueron suscritos por los únicos dos socios de la empresa, es decir, no se observa participación alguna de su parte.

---

<sup>12</sup> Resulta aplicable por analogía la tesis “EMPLAZAMIENTO. LOS DEFECTOS O VICIOS DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA QUEDAN DEPURADOS CUANDO SE CONTESTA LA DEMANDA Y SE EJERCE EL DERECHO DE DEFENSA, SIN VULNERARSE, POR ENDE, LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.”, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 182647, consultable en el siguiente link <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/182647>

## **RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

Al respecto, esta autoridad administrativa electoral destaca que la norma estatutaria es clara al señalar que, al advertirse la existencia de actividades u operaciones que pudieran representar un conflicto de intereses, las personas servidoras del INE se encuentran obligados a excusarse de participar en los mismos, a fin de que dichas actividades no sean consideradas como una actuación parcial en favor de los partidos políticos.

En ese sentido, si en el caso, la Empresa Consultora de la que era socio y apoderado el ahora recurrente realizó actividades remuneradas y celebró contratos con el PRD, mientras desempeñaba cargos dentro del INE, resulta posible la existencia de un interés personal y económico derivado de la relación con el partido político, lo cual se considera afecta la imparcialidad de las actividades que desempeñaron en su relación contractual para con el Instituto.

Al respecto, resulta oportuno destacar que la norma no sanciona la consumación de un acto que genere un posible conflicto de interés, sino que, de manera preventiva y, a efecto de que no se realicen actos en perjuicio del INE, vincula a su personal a excusarse de participar en actos que pudieran representar alguno, por lo que es obligación de todas y todos los funcionarios dar aviso de una situación que, en su caso, pudiera dar lugar a un conflicto de interés.

Así, contrario a lo esgrimido por la parte actora, la infracción que se le atribuye se configuró desde el momento en el que el ahora inconforme no se excusó de participar en una actividad que representa un conflicto de interés, tomando en cuenta que al tener el carácter de socio y de representante de la Empresa Consultora, se transgredió el principio de imparcialidad que debe imperar en el ejercicio de la función electoral, dado a que esta misma realizó diversas actividades de consultoría a favor de un instituto político, tal y como quedó acreditado en los medios de prueba, mientras que el propio recurrente se encontraba contratado simultáneamente por el INE bajo el régimen de prestación de servicios y, posteriormente, como miembro del SPEN.

Las actividades que el recurrente tenía encomendadas se encontraban relacionadas con la revisión y fiscalización de los ingresos y egresos de los diversos sujetos obligados, situación que lo ubicó en una situación de conflicto de intereses en contravención al principio de imparcialidad de las fiscalizaciones que efectuaron.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

Además, se insiste que la parte actora en ningún momento acreditó la revocación del poder que le fue otorgado por la Empresa Consultora.

Ahora, lo relativo a la indebida valoración probatoria del acta circunstanciada de accionistas de la empresa fechada el 27 de mayo de 2016, en la cual se acordó la venta total de las acciones que le correspondían, es **infundado** toda vez que contrario a lo esgrimido, dicho documento carece de valor probatorio pleno para acreditar que, desde esa fecha, el ahora recurrente dejó de formar parte de la Empresa Consultora.

En efecto, la prueba se hace consistir en una certificación en la cual únicamente el notario público cotejó que la copia fotostática exhibida corresponde al documento denominado “Acta circunstanciada”, la cual, es fiel reproducción de su original, dando fe de haberla tenido a la vista el 21 de julio de 2021, por lo que su alcance probatorio, no puede ser el de acreditar que desde esa fecha dejó de ser accionista de la Empresa Consultora, sino que, dicho documento solo certifica que la copia fotostática es fiel reproducción de su original y que solo tiene el efecto de acreditar la identidad de lo cotejado con el documento exhibido ante el notario público.

Por otra parte, de las constancias que obran en el expediente se advierte que, mediante el instrumento notarial 36591, de 26 de julio de 2017, se protocolizaron las determinaciones adoptadas en la acta de asamblea general extraordinaria de accionistas del 19 de julio de 2019, relativas a la venta de las acciones de las que era propietario el ahora inconforme, lo cual sí tiene el alcance y valor probatorio pretendido por el recurrente, es decir, que a partir del 26 de julio de 2017 dejó de ser socio de la Empresa Consultora; sin embargo, no se le desvincula o se le revoca de su carácter de apoderado de la misma.

A su vez, por lo que concierne a su dicho referente a que nunca tuvo la responsabilidad de revisar los informes presentados por el PRD en San Luis Potosí, además que no se encuentra acreditado en las constancias del procedimiento laboral que en el desempeño de sus funciones hubiere sido de manera parcial, por el contrario, su trabajo siempre estuvo supervisado por el superior jerárquico y por el personal de la UTF, tal motivo de inconformidad es **infundado**, tomando en cuenta que la conducta infractora se configuró desde el momento en el que el inconforme no se excusó de participar en una actividad que representa un posible conflicto de interés para este Instituto, ya que siendo parte de la UTF, tuvo al mismo tiempo el carácter de socio y de representante de la Empresa Consultora que prestó sus servicios a un partido político, incumpliendo de esta manera con dicha obligación que tiene el personal del INE.

## RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024

Además, la responsable señaló de manera correcta que, aún en el supuesto de que el recurrente no hubiere participado en las fiscalizaciones realizadas al PRD, al haber formado parte de la UTF, contaba con información privilegiada e instrumentos propios del Instituto y de las labores que desempeña la propia área, por lo que, la empresa de la cual era socio y apoderado pudo obtener información que, a su vez, pudiera utilizarse en beneficio de un partido político.

En ese sentido, contrario a lo esgrimido por el ahora recurrente, en autos se encuentra plenamente acreditado la vulneración al principio rector de la imparcialidad, tomando en cuenta que el recurrente no se excusó de participar en actividades de las cuales pudiera obtener un beneficio como socio y apoderado de una empresa vinculada con un partido político.

Por otro lado, esta autoridad administrativa electoral considera que en el presente procedimiento opera el principio de cosa juzgada<sup>13</sup>, respecto a lo resuelto en el diverso recurso de inconformidad INE/RI/37/2022 y su acumulado INE/RI/38/2022, interpuestos en contra de la resolución dictada en el procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED], al existir determinación con relación a lo que se reclama en el asunto objeto de estudio.

Partiendo del hecho de que la certeza jurídica es uno de los principios rectores de todo proceso jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución federal; la Ley de Medios (de aplicación supletoria de conformidad con lo previsto en el artículo 289, fracción V, del Estatuto)<sup>14</sup> y el Estatuto<sup>15</sup> prevén que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y de legalidad, y de manera específica a los de certeza, imparcialidad, objetividad, probidad y máxima publicidad.

---

<sup>13</sup> *COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA, AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES.* Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 52/2011.

<sup>14</sup> **Artículo 3.1.** El sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar: a) Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos electorales y de consulta popular se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, y b) La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.

<sup>15</sup> **Artículo 286.** Las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución, tratados internacionales, leyes, el Estatuto, los lineamientos y demás normativa aplicable.

La actuación de las autoridades conciliadora, instructora y resolutora deberá apegarse al cumplimiento de los principios rectores de la función electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, además de congruencia, exhaustividad, justicia y equidad.



## RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024

Así, la cosa juzgada tiene por objeto proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir la prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo que ocurriría si se mantuvieran abiertas las posibilidades de impugnar los fallos emitidos en cada uno de los procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos u otros procesos, provocando nuevos y constantes juzgamientos, y por lo tanto, la incertidumbre en la esfera jurídica de las personas involucradas en los asuntos, así como de todas las demás que con ellas entablan relaciones de derecho.

De igual forma, encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de la ciudadanía en el goce de sus libertades y derechos.<sup>16</sup>

Ahora, la cosa juzgada puede surtir efectos de dos maneras distintas; la primera, a través de la eficacia directa que opera cuando los elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias de que se trate.

La segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa.

Lo anterior, por tener una misma causa, hipótesis en la cual, el efecto de lo decidido en el primer juicio se refleja en el segundo, de modo que las partes de este quedan vinculadas por la primera sentencia.<sup>17</sup>

En el caso, la parte actora aduce que la responsable al emitir la resolución materia de impugnación realizó una indebida valoración del material probatorio, así como la omisión de llevar a cabo una investigación exhaustiva y robusta de los hechos tildados de irregulares, toda vez que fundamentó sus acusaciones en meras suposiciones sin acreditarlas de manera fehaciente, así como lo relativo a que la responsable no acreditó el supuesto beneficio económico a su favor, ni tampoco algún menoscabo pecuniario del patrimonio del Instituto, toda vez que del informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no se desprendió cantidad alguna

---

<sup>16</sup> De acuerdo al criterio sostenido en la jurisprudencia 12/2003<sup>16</sup>, emitida por la SCJN, de rubro: COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.

<sup>17</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

adicional a su ingreso obtenido diferente a su salario recibido por su trabajo en el INE, así como tampoco de su cónyuge, ni de ningún otro familiar durante el periodo comprendido del 2016-2020; además de que la autoridad responsable no precisa, ni acredita las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos infractores, ya que si bien participó de la creación de la Empresa Consultora no tuvo injerencia en la celebración de las contrataciones entre la mencionada y los partidos políticos en San Luis Potosí, por lo que no existió un tipo de interés personal o económico, tal y como fue informado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que dejó de ser socio de la misma desde el 26 de julio de 2017.

No obstante, mediante resolución dictada el 21 de febrero de 2023, en los autos del diverso recurso de inconformidad INE/RI/37/2022 y su acumulado INE/RI/38/2022, interpuestos en contra de la resolución del procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/██████, mismo que ahora impugna el recurrente, este órgano administrativo electoral determinó confirmar la sanción consistente en la **destitución**, de otras dos personas, al haberse acreditado las conductas infractoras atribuidas en su contra, previstas en los artículos 71, fracciones II, XXII y XXIII, 72, fracciones III y XXI; 172 y 173, del Estatuto.

Al efecto, esta autoridad electoral consideró que el ahora recurrente como cónyuge de una de las partes involucradas ostentaba la calidad de socio y apoderado de la Empresa Consultora que prestaba servicios, entre otros, al PRD, aunado a que su cónyuge (ahora recurrente) no comprobó la revocación del poder que le brinda el carácter de representante de dicha empresa, situación que acredita, además, el involucramiento en las probables conductas infractoras que pudiera influir en las actividades que desempeñaba o en la imparcialidad que debe regir en el actuar de las personas servidoras del INE.

También se indica que, tal y como bien lo sostiene la responsable, del Acta Constitutiva de la Empresa Consultora se desprende que el cónyuge de la recurrente (parte actora en el presente en el recurso de inconformidad) era socio y apoderado de la misma, así como del acta de matrimonio entre ambos, se advierte que su vínculo matrimonial se contrajo en marzo de 2017.

En ese sentido, se acreditó que la venta de las acciones de la Empresa Consultora por parte del cónyuge (parte actora) se formalizó en julio del mismo 2017; por lo cual, existe un periodo de 4 meses en que se acredita la existencia del vínculo matrimonial, así como el vínculo de su cónyuge (parte actora) como socio de la empresa consultora. Aunado a ello, en ningún momento se demostró que se desvinculó o se revocó el carácter de apoderado del cónyuge (parte actora).

## RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024

Así, esta autoridad electoral resolvió que toda vez que el vínculo matrimonial que se tenía con una persona que era socia y apoderada (parte actora en el presente recurso de inconformidad) de una empresa que prestó sus servicios a un instituto político, por sí mismo, acredita un conflicto de interés, poniendo en riesgo la equidad y certeza en las contiendas electorales.

Por otro lado, se indicó en la resolución en cita que, el conflicto de interés se originó por el vínculo matrimonial que tiene con una persona que era socia y es apoderada de una empresa que prestó sus servicios a un partido político cuando ella era funcionaria (cónyuge del ahora recurrente) de este Instituto, específicamente, de un área de fiscalización, lo que constituye dicho conflicto de intereses, actualizándose los supuestos normativos previamente referidos.

Por tanto, esta Junta General concluyó que contrario a lo esgrimido por la entonces recurrente (cónyuge del ahora recurrente) la determinación objeto de impugnación se encontraba debidamente fundada y motivada, toda vez que citaron con precisión los preceptos legales aplicables, así como también las circunstancias especiales, las razones particulares y las causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión de la resolución, al existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables contenidas dentro del expediente, y se realizó la valoración de las pruebas de cargo y descargo conforme a la sana crítica, sin contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, realizando un análisis respecto al contenido y alcance de la misma, y con base en ello, se emitió la resolución en comento, razón por la cual se impuso una sanción administrativa a los recurrentes.

Es por ello que es oportuno analizar los elementos que actualizan la eficacia refleja de la cosa juzgada en el presente asunto, como se explica a continuación.

### **a) La existencia de un proceso resuelto con sentencia que ha causado ejecutoria**

Este elemento se actualiza, porque el 21 de febrero de 2023, en los autos del diverso recurso de inconformidad INE/RI/37/2022 y su acumulado INE/RI/38/2022, interpuestos en contra de la resolución dictada en el procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED], esta Junta General Ejecutiva determinó confirmar la sanción consistente en la **destitución**, entre otras personas, del ahora recurrente, al haberse acreditado las conductas infractoras atribuidas en su contra.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

En tal resolución se consideró que al ostentar la calidad de socio y apoderado de la Empresa Consultora que prestaba servicios, entre otros, al PRD, aunado a que se no comprobó la revocación del poder que le brinda el carácter de representante de dicha empresa, situación que acredita, además, el involucramiento en las probables conductas infractoras que pudiera influir en las actividades que desempeñaba o en la imparcialidad que debe regir en el actuar de las personas servidoras del INE.

**b) La existencia de otro proceso en trámite**

Se cumple, en tanto se encuentra en trámite el presente recurso de inconformidad **INE/RI/SPEN/1/2024**, interpuesto en contra de la resolución dictada en el procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED].

**c) El objeto de los dos procedimientos debe ser conexo**

Se satisface, porque al resolver el recurso de inconformidad INE/RI/37/2022 y su acumulado INE/RI/38/2022, interpuestos en contra de la resolución dictada en el procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED], esta Junta General Ejecutiva consideró que al ostentar la calidad de socio y apoderado de la Empresa Consultora que prestaba servicios, entre otros, al PRD, aunado a que se no comprobó la revocación del poder que le brinda el carácter de representante de dicha empresa, situación que acredita, además, el involucramiento en las probables conductas infractoras que pudiera influir en las actividades que desempeñaba o en la imparcialidad que debe regir en el actuar de las personas servidoras del INE.

De ahí que, al existir una sentencia anterior queda acreditada la conexidad, es posible recaer en la emisión de resoluciones contradictorias.

**d) Las partes del segundo procedimiento deben quedar obligadas con la ejecutoria del primero**

Se actualiza, porque el ahora recurrente se encuentra vinculado a lo decretado en la sentencia dictada en el recurso de inconformidad INE/RI/37/2022 y su acumulado INE/RI/38/2022.

Lo anterior, con independencia de que en los citados medios de defensa, no haya sido parte el ahora recurrente; sin embargo, ambos asuntos se encuentran estrechamente unidos en lo sustancial y son dependientes de la misma causa, tomando en consideración que en dicha ejecutoria se indicó que al ostentar la

**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

calidad de socio y apoderado de la Empresa Consultora que prestaba servicios, entre otros, al PRD, aunado a que se no comprobó la revocación del poder que le brinda el carácter de representante de dicha empresa, situación que acreditaba la infracción objeto de denuncia, por lo que actualizaba la hipótesis prevista los artículos 71, fracciones II, XXII y XXIII, 72, fracciones III y XXI; 172 y 173, del Estatuto, y en consecuencia, confirmar la destitución de las personas involucradas, entre ellas, el ahora recurrente.

**e) En ambos casos se presenta un hecho o situación que constituye un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del nuevo litigio**

Se satisface, porque en el asunto actual se debe determinar si la resolución dictada en el procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/██████ relacionada con la destitución del ahora recurrente, en razón de haberse actualizado la hipótesis normativa prevista los artículos 71, fracciones II, XXII y XXIII, 72, fracciones III y XXI; 172 y 173, del Estatuto es o no conforme a Derecho, situación jurídica que ya fue materia de pronunciamiento al resolver el diverso recurso de inconformidad INE/RI/37/2022 y su acumulado INE/RI/38/2022.

**f) En la sentencia ejecutoriada se debe sustentar un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico**

Este elemento también se cumple porque al resolver el recurso de inconformidad INE/RI/37/2022 y su acumulado INE/RI/38/2022, esta autoridad administrativa electoral determinó que al ostentar la calidad de socio y apoderado de la Empresa Consultora que prestaba servicios, entre otros, al PRD, aunado a que se no comprobó la revocación del poder que le brinda el carácter de representante de dicha empresa, actualizaba la hipótesis prevista los artículos 71, fracciones II, XXII y XXIII, 72, fracciones III y XXI; 172 y 173, del Estatuto.

De ahí, que ya exista un criterio preciso y claro, sobre la calificación de la conducta atribuida al ahora recurrente, as.

**g) Para resolver el segundo procedimiento, se requiere asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo resuelto**

Esto también se cumple, puesto que, se insiste, en el recurso de inconformidad que se resuelve, se debe determinar respecto de la calidad de socio y apoderado de la

**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

parte actora respecto de la Empresa Consultora que prestaba servicios, entre otros, al PRD, a efecto de tener por actualizada o no la hipótesis prevista los artículos 71, fracciones II, XXII y XXIII, 72, fracciones III y XXI; 172 y 173, del Estatuto.

Esto configura el elemento lógico-común idéntico en ambos casos, y que, en caso de analizarse el fondo del asunto que hoy se estudia, podría conllevar la existencia de fallos contradictorios que coinciden en lo sustancial.

Por tanto, se advierte que esta Junta General Ejecutiva ya se pronunció sobre la condición jurídica del ahora recurrente (socio y apoderado de la Empresa Consultora que prestaba servicios, entre otros, al PRD), por lo que no es dable volver a emitir pronunciamiento sobre éstos, pues se actualiza la **eficacia refleja de la cosa juzgada**.

Lo anterior, porque volver a estudiar dichas cuestiones con motivo del recurso de inconformidad que ahora se atiende, cuando ya existe pronunciamiento definitivo previo al respecto, supondría desconocer la inalterabilidad de diversas decisiones adoptadas con antelación, siendo incompatible con los principios y reglas que ordenan el sistema de medios de impugnación, lo cual actualiza el primer elemento de la eficacia refleja de la cosa juzgada en los términos antes descritos.

Así, se sostiene que en el caso que se resuelve, aplica el criterio de la **eficacia refleja** de la cosa juzgada, lo cual impide la válida constitución de la relación jurídica procesal, al haberse emitido pronunciamiento respecto de lo hoy denunciado, en el recurso de inconformidad INE/RI/37/2022 y su acumulado INE/RI/38/2022, mismo que derivó en confirmar la sanción consistente en la destitución, entre otras personas, del ahora recurrente.

En otro orden, el motivo de agravio identificado con el **punto seis** de la síntesis respectiva, relacionados con la ausencia del pago de compensación, tomando en cuenta que de conformidad con lo previsto en el artículo 349 del Estatuto, la persona sujeta al procedimiento que se separe o sea separada por cualquier forma del Instituto. sin que el procedimiento haya concluido, no será considerada para el pago de compensación que le corresponda, así como que la determinación impugnada no es legalmente adecuada ni aplicable, por lo que debe ser revocada con apoyo en lo resuelto por el Órgano Interno de Control del INE.

Esta autoridad administrativa electoral considera que tal alegación deviene **inoperante**, toda vez que con independencia del alcance de la resolución dictada en el procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/██████, misma que ya

## RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024

fue confirmada por esta autoridad electoral en términos de la sentencia dictada en el recurso de inconformidad INE/RI/37/2022 y su acumulado INE/RI/38/2022, se trata de argumentos genéricos y ambiguos no dirigidos a combatir el alcance jurídico de la disposición normativa en comento, aunado a que los motivos de agravio relacionados con la actualización de la infracción objeto de controversia han sido desestimados.

Al respecto, debe señalarse que los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a cuestiones debatidas en un medio de impugnación, manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar el acto o resolución impugnado.

Por tanto, lo señalado por el recurrente en su escrito de recurso de inconformidad no es suficiente para tener por debidamente configurado un agravio, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere, además de que, en ningún momento establece razonamiento o elemento mínimo para apoyar su afirmación.<sup>18</sup>

Finalmente, deviene **infundado** la alegación relacionada que la determinación impugnada no es legalmente adecuada ni aplicable, por lo que debe ser revocada con apoyo en lo resuelto por el Órgano Interno de Control del INE.

El artículo 109, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución federal<sup>19</sup> señala que, los procedimientos que se inicien con motivo de las responsabilidades en que incurra una persona servidora pública, son autónomos, por lo que si una conducta

---

<sup>18</sup> Al respecto, resultan aplicables las Tesis jurisprudenciales I.6o.C. J/21 y I.4o.A. de los Tribunales Colegiados de Circuito, así como la Jurisprudencia 1a./J. 81/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros siguientes:<sup>18</sup>: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO; CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.

<sup>19</sup> **Artículo 109.** Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

...

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

...

## **RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

es sancionable por diversas leyes, resulta permisible iniciar contra esa servidora dos o más procesos a la vez, con la única limitación de no imponer dos veces sanciones de igual naturaleza, por una sola conducta.

En relación a la autonomía en este tipo de procedimientos, la Sala Superior ha considerado que la misma se traduce en que para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias y ajenas a las restantes, de modo que una persona servidora pública puede ser sujeta de varias responsabilidades por una sola conducta y, por lo mismo, susceptible de ser sancionada en diferentes vías y con distintas sanciones; la naturaleza de la responsabilidad que se le finque dependerá de las reglas que resultan violadas con su actuación, y de los efectos que de las mismas deriven, pues bien puede acontecer que un hecho no pueda ser constitutivo de delito, por no ajustarse a la descripción de la norma legal, pero que resulte una infracción disciplinaria que además haya causado lesión a las finanzas públicas, en cuyo caso la persona servidora podrá ser sancionada administrativamente con una multa o destitución, por ejemplo, y además estará obligado a reparar el daño patrimonial causado.<sup>20</sup>

En el caso que nos ocupa, se instruyó contra la parte actora un procedimiento laboral sancionador por la presunta comisión de la conducta prohibitiva consistente en desempeñar otro empleo, cargo, comisión o cualquier otra actividad remunerada ajenos al Instituto, durante el horario laboral establecido, así como haber realizado una actuación parcial a favor de partidos políticos.

En ese sentido, resulta evidente que las acciones desplegadas por la parte actora dieron origen a dos tipos de responsabilidad, a saber: laboral-administrativa a cargo del INE y responsabilidad-administrativa por parte del Órgano Interno de Control.

Así, la potestad de aplicar sanciones administrativas surge de la necesidad del desenvolvimiento de actividades públicas que requieren vínculos de lealtad ético-profesionales entre los sujetos particularmente obligados y el Estado, por lo que las normas de esa naturaleza se aplican únicamente a quienes se encuentran en una relación de sujeción y persiguen imponer a la persona funcionaria la observancia de sus deberes.

---

<sup>20</sup> SUP-JLI-93/2007.



**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

Por su parte, las disposiciones normativas que regulan la actuación de los órganos internos de control se originan para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas.

Luego, al resultar incontrovertible la autonomía que existe entre las laboral-administrativa a cargo del INE y responsabilidad-administrativa por parte del Órgano Interno de Control, es posible considerar que el resultado de uno de esos procedimientos no puede influir o repercutir de forma alguna en el otro.

En ese tenor, contrario a lo señalado por la parte actora, la investigación y resultado de una investigación de presunta responsabilidad administrativa por parte del Órgano Interno de Control en contra del ahora recurrente, no puede trascender de modo alguno en el resultado del procedimiento laboral sancionador relacionado la presunta comisión de la conducta prohibitiva consistente en desempeñar otro empleo, cargo, comisión o cualquier otra actividad remunerada ajenos al Instituto, durante el horario laboral establecido, así como haber realizado una actuación parcial a favor de partidos políticos.

Lo anterior, porque aun cuando en el procedimiento seguido ante el Órgano Interno de Control del INE se hubiere arribado a la conclusión de que el ahora recurrente no incurrió en responsabilidad administrativa, tal circunstancia no podría impedir que la conducta desplegada por la persona trabajadora se estimara indebida desde la vertiente del procedimiento laboral sancionador; considerar lo contrario, atentaría contra la propia naturaleza de cada procedimiento, así como al principio de autonomía previsto en el artículo 109, fracción IV, segundo párrafo de la Constitución federal.

Además, ello conduciría a que la autoridad alargara indefinidamente su actuación en perjuicio de la certeza en el desenvolvimiento del procedimiento sancionador, ante la posibilidad de que pudiera sancionarse a una persona servidora del Instituto Nacional Electoral en cualquier época.

Igualmente, resulta oportuno destacar que el procedimiento del Órgano Interno de Control se basó en la acreditación del incumplimiento de la obligación como servidor público, prevista en el artículo 8, fracción XII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las cuales difieren de las acreditadas en el PLS.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

Máxime que, el Procedimiento Laboral tiene como objeto determinar sobre el probable incumplimiento de obligaciones o acreditación de prohibiciones en su calidad de personal del Instituto y no así en su calidad de servidor público.

Al respecto, resulta aplicable la tesis número VI.3o.A.55 A (10a.), décima época, materia administrativa, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 51, febrero de 2018, Tomo III, página 1531, así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a. CXXVI/2002, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, octubre de 2002, página 475, de rubros y contenido siguiente:

**PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS. DADA SU AUTONOMÍA, LO RESUELTO EN UNO NO PUEDE IMPACTAR EN EL OTRO.**

El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que los procedimientos para la aplicación de las sanciones por conductas llevadas a cabo por servidores públicos se desarrollarán autónomamente y que las leyes establecerán los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Entonces, tanto el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, como el diverso para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, tienen finalidades u objetos distintos y se siguen y sustancian con base en leyes de distinta naturaleza, que se rigen bajo un sistema que descansa en un principio de autonomía, conforme al cual, por cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque tengan algunas de ellas coincidencia desde el punto de vista material. Lo anterior se confirma, porque tanto la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos -ambas abrogadas- son enfáticas en precisar que los procedimientos a que se refieren se desarrollan en forma autónoma y por la vía procesal que corresponda, lo que implica que lo que se resuelva en uno, no puede impactar en el otro, esto es, ambos pueden subsistir.

**RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 109 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CON MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE CONDUCTAS U OMISIONES QUE PUEDAN CONSTITUIRLAS.**

El artículo 109 constitucional contiene diversos principios, a saber: que el procedimiento de responsabilidad administrativa es independiente y autónomo del político, del penal y del civil a que pudiera dar lugar una sola conducta ilícita cometida por un servidor público; que la naturaleza de la responsabilidad administrativa tiene como objetivo preservar el correcto y eficiente servicio público, según se lee de su fracción III

**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

que señala que se sancionarán los actos u omisiones de los servidores públicos "... que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. ..."; que la autonomía del procedimiento, en concordancia con la propia naturaleza de la responsabilidad administrativa, conlleva a determinar que la sanción también es administrativa y, por ende, que la sustanciación de ese procedimiento y la imposición de la sanción corresponden al superior jerárquico del servidor público infractor; finalmente, que la potestad del superior jerárquico para castigar faltas disciplinarias de los servidores públicos, regulada en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, acoge el sistema que reconoce a la administración esta potestad doméstica, derivada de la función de autotutela que le permite sancionar faltas de sus miembros e, incluso, expulsarlos cuando su permanencia es incompatible con aquélla.

En consecuencia, esta Junta General Ejecutiva considera que la resolución emitida en el Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED], se encuentra debidamente fundada y motivada; por lo tanto, se cumplió con el principio de legalidad.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 368 del Estatuto, así como los fundamentos citados en la presente determinación, al haber resultado **infundados e inoperantes** los agravios de la parte recurrente, se

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se **confirma** la resolución dictada en el Procedimiento Laboral Sancionador INE/DJ/HASL/PLS/[REDACTED], en los términos precisados en el **Considerando Cuarto** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional Electoral notifique como corresponda a la parte recurrente.

**TERCERO.** Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, agregar una copia de la presente Resolución al expediente personal que se tiene a nombre del recurrente y se realicen las acciones a las que haya lugar.

**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

**CUARTO.** Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 15 de febrero de 2025, por votación unánime del Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Licenciado Alejandro Sosa Durán; de la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Licenciada Guadalupe Yessica Alarcón Góngora; del Director Ejecutivo de Organización Electoral, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; de la Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Licenciada María Elena Cornejo Esparza; de la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, Doctora Amaranta Arroyo Ortiz; del encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Maestro Juan Manuel Vázquez Barajas; de los encargados de los Despachos de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Maestro Isaac David Ramírez Bernal y de lo Contencioso Electoral, Licenciado Hugo Patlán Matehuala; del Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Licenciado Giancarlo Giordano Garibay; de la Secretaria Ejecutiva y Secretaria de la Junta General Ejecutiva, Doctora Claudia Arlett Espino y de la Consejera Presidenta y Presidenta de la Junta General Ejecutiva, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala; no estando presente durante el desarrollo de la sesión, el encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, Licenciado Roberto Carlos Félix López.


**LA CONSEJERA PRESIDENTA  
DEL CONSEJO GENERAL Y  
PRESIDENTA DE LA JUNTA  
GENERAL EJECUTIVA DEL  
INSTITUTO NACIONAL  
ELECTORAL**

**LA SECRETARIA EJECUTIVA Y  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
GENERAL EJECUTIVA DEL  
INSTITUTO NACIONAL  
ELECTORAL**

**LIC. GUADALUPE TADDEI  
ZAVALA**

**DRA. CLAUDIA ARLETT  
ESPINO**

**RECURSO DE INCONFORMIDAD  
EXPEDIENTE INE/RI/SPEN/1/2024**

	<b>Junta General Ejecutiva</b>
<p><b>Tipo de documento:</b> Documento clasificado (parcialmente): Recurso de Inconformidad INE/RI/SPEN/1/2024, interpuesto en contra de la resolución del procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/███, emitida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.</p> <p><b>Fundamento jurídico:</b> Con fundamento en los artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 y 8, de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados; 15, numeral 2, fracción I, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la resolución INE-CT-R-04873-2018 emitida por el Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral.</p> <p><b>Clasificación Parcial.</b> Se clasifican como confidenciales los datos correspondientes al nombre de la parte recurrente y todos aquellos datos que hacen identificables a las personas involucradas en el asunto, ubicados desde la página 1 hasta la foja 37.</p> <p><b>Titular del Área.</b></p>	